

UN COMPROMISO ANTIHISTÓRICO

REPORTER 22. 20 OCTUBRE 1977

ANTONIO GARCIA-TREVIJANO

Los acuerdos de la Moncloa, sobre determinados temas de la coyuntura económica y política, están siendo presentados ante la opinión como si fueran un compromiso de carácter histórico entre las clases sociales que permitirá, al fin, la realización de la democracia en España. Esta falsificación ideológica de la realidad no puede conducir más que a una nueva, si es que todavía cabe, frustración. Porque los acuerdos de la Moncloa a pesar de los aspectos positivos que indudablemente tienen, no pueden engendrar lo que no llevan en sus entrañas.

Es cierto que por debajo de las estipulaciones expresamente pactadas, en materia de legislación económica y política, existe un compromiso de mayor envergadura. Pero ni este compromiso se ha contraído ahora, ni su alcance político es de trascendencia histórica. Los acuerdos de la Moncloa son la conclusión natural del comprometido camino iniciado por los partidos de oposición democrática cuando aceptaron participar en unas elecciones controladas por el poder franquista, y sin un periodo previo de libertad y de información para el elector. Sobre ese pecado original no se puede edificar nada que sea profundamente real y, por tanto, duradero. El hecho mismo de que los partidos que protagonizaron las elecciones y la constitución del Parlamento se vean obligados, «por la fuerza de las cosas», a sustituir la acción legislativa parlamentaria por una constante serie de pactos extraparlamentarios, supone la más severa condenación del 15 de junio y la más auténtica confusión del error cometido por la oposición en sus anteriores pactos con el Gobierno.

Pero el compromiso en la política es ineludible. Sólo el fanatismo y la ingenuidad pueden alimentar la ilusión de que es posible el desarrollo de una acción política autónoma sin contaminación o influencia de las demás acciones que se le oponen, o concurren con ella, en el mismo escenario. El rechazo de todo tipo de compromiso político con el adversario, o con el aliado potencial, denota, en el fondo, no una pureza moral o una firmeza de carácter, sino una inseguridad en la propia convicción y una falta de fe en la potencia creadora de la propia ideología. La intransigencia política es, casi siempre, un pretexto o refugio contra el miedo al peligro y al riesgo inherentes a la acción libre. Por ello, las actitudes aparentemente ultrarrevolucionarias de quienes, en nombre de una clase de la que se consideran intérpretes, rechazan toda posibilidad de entendimiento con otros partidos y otras clases esconden en realidad el mismo recelo ultraconservador con el que el integrista tradicional se opone a toda idea de cambio.

Ahora bien, afirmar la necesidad histórica del compromiso político sin precisar cuándo y cómo se hace históricamente necesario nos puede llevar, y de hecho nos está llevando, a otra especie de infantilismo, igualmente peligroso y reaccionario. Tan irreal es la ilusión antipactista de confiar al progreso al desenvolvimiento de las fuerzas sociales que encierran el porvenir, como la ilusión pactista de dominar la necesidad del desarrollo social mediante el compromiso político. El «fetichismo» del pacto, que practica hoy la clase política instalada en el Régimen de la Restauración, expresa así, por paradójico que parezca el mismo grado de inseguridad y de temor ante la acción libre que el expresado por los «grupúsculos» que se refugian en la violencia. La relación entre estas dos especies opuestas de «voluntarismo de la inseguridad» es tan profunda que ninguna de ellas puede vivir sin la otra. Se pacta para evitar la violencia. Se engendra la violencia para evitar el pacto. Ningún compromiso histórico puede surgir del temor.

No es ningún azar que los acuerdos de la Moncloa tengan que versar a la vez sobre un pacto de legislación represiva de orden público. Una ley de defensa de la democracia, cuando no hay un poder democrático en el Estado, funciona necesariamente como una ley del temor a la libertad y a la democracia, y como una ley de defensa del poder financiero actual.

El pacto o compromiso histórico entre las clases sociales opuestas que necesitan las libertades formales para asegurar la expansión de sus respectivos intereses era, y sigue siendo,

indispensable. Pero este pacto -entre la burguesía industrial, las capas tecnoburocráticas, la burguesía profesional y las clases trabajadoras- no podrá, ni puede, hacerse sin ruptura de la unidad que realiza la clase financiera, por su condición de clase hegemónica, sobre todo el conjunto de la burguesía. Sin la ruptura democrática a nivel del Estado, todo pacto de la oposición con el poder se convierte automáticamente en un pacto de conservación y reforzamiento de la clase que realiza la unidad del poder en el Estado, que en España es el capital financiero, y no, como en Europa, el capital industrial.

La Junta Democrática y la Asamblea de Catalunya fueron compromisos políticos para la realización de esa ruptura de la burguesía industrial con la oligarquía financiera. El carácter históricamente necesario de este compromiso para la instalación por vía pacífica de la democracia, y para la superación de la crisis económica, determina el fracaso de todos los pactos o compromisos anti-históricos que los partidos de la oposición han contraído y contraen con el poder actual pero conservarlo tal cual es.

Por esta razón, tres meses antes de las elecciones, escribí en «La Alternativa Democrática». lo siguiente «Sólo el oportunismo de la clase dirigente, del Gobierno y de la oposición convencional, puede aceptar este compromiso antihistórico: el poder de la Administración y el control del Estado para la clase franquista que abjuró de su pasado y de su ideología: el poder de la retórica, es decir, la apariencia de poder ante la sociedad, para la clase democrática que renuncie a la legitimación popular del poder».

Los acuerdos de la Moncloa, como continuación del compromiso político de conservación del poder de la oligarquía financiera en el Estado, son un compromiso antihistórico, que puede dar satisfacción a corto plazo a la clase política, pero que no puede despertar ninguna esperanza popular. Y sin esta esperanza es ilusorio «esperar» de las clases trabajadoras que acepten, sin protestar, el sacrificio que estos acuerdos le imponen.